

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ejecutivo conexo
DEMANDANTE	GONZALO NICOLAS MORENO SUAREZ
DEMANDADO	FUNDACIÓN FUNDABBA EN LIQUIDACIÓN
PROCEDENCIA	Juzgado 13º Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 013 2022 00168 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	Auto interlocutorio Nro. 65 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Decreto medida cautelar en los términos del artículo 465 del CGP
DECISIÓN	Confirma por otras razones

Medellín, veinticinco (25) de octubre de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los Magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado del ejecutante, contra el auto proferido el 1º de septiembre de 2022 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito, dentro del proceso coactivo promovido por **Gonzalo Nicolas Moreno Suarez** en contra de la **Fundación Fundabba en Liquidación**, código de radicado único nacional número 05001 3105 **013 2022 00168** 01.

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que el abogado Gonzalo Nicolás Moreno Suárez, actuando en causa propia, solicitó mandamiento de pago, a continuación de proceso ordinario, en contra de la Fundación

Fundabba en Liquidación, con base en las sentencia proferida en primera instancia, por lo siguiente:

• *Lo señalado en la parte resolutive de la sentencia N°152 de 2022 emitida por ese despacho el día 4 de abril de 2022, esto es, "la suma de: \$66.476.287 a título de honorarios profesionales por su gestión en el proceso verbal bajo radicado 05001310300720140025300 y en el proceso ejecutivo radicado 05001310300920160076800, con la correspondiente indexación", y por las costas del proceso ordinario las cuales ascendieron a la suma de \$4.650.000.*

Concediéndose la orden de apremio en los términos solicitados, el 19 de mayo del año en curso.

Pidió el ejecutante la siguiente medida cautelar, conforme lo dispuesto en el artículo 465 del CGP:

“

77.233 del C. S. de la J., obrando en mi propio nombre en mi condición de abogado en ejercicio, conocido como demandante en el ejecutivo conexo referido, en forma respetuosa, ruego ordenar el embargo y secuestro - en la cuantía que usted considere -, para asegurar el pago de lo pretendido en esta demanda ejecutiva, del dinero que tiene la FUNDACION FUNDABBA y está a órdenes del JUZGADO 12° PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE MEDELLIN, en el proceso penal con radicado No. 05001600020620134105600, de estafa agravada y otros delitos contra el patrimonio económico, en el cual fueron condenados ANDRES FELIPE VILLADA PENAGOS, MARIA ELENA PENAGOS RIOS, MARIA GIRLESA TORRES SEPULVEDA e IVAN DAYRON PIEDRAHITA VARGAS y afectada FUNDACION FUNDABBA y LA SEGURIDAD PUBLICA; proceso penal en el cual actualmente está en trámite el incidente de reparación integral.

El dinero que actualmente reposa a órdenes del JUZGADO 12° PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN, es por un valor total de \$467.549.885.53. puestos a disposición del nombrado JUZGADO 12°, por el

JUZGADO 9º CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN - que tramitó el proceso ejecutivo con sentencia de la FUNDACION FUNDABBA EN LIQUIDACION contra ALVARO LOPEZ GALLEGO y otros, con radicado No. 05001310300920160076800 – y esos títulos judiciales correspondieron a los números Nos. 211793480, 211794351, 211795282, 211799281, 211793279 y 211794147, que representaban, el valor total mencionado, de \$467.549.885,53 pagado por los demandados ALVARO LOPEZ GALLEGO y otros, como devolución del dinero dado por la FUNDACION FUNDABA como parte del precio de lote cuya promesa de contrato de compraventa fue declarada resuelta judicialmente por mutuo disenso. ”

Luego de que el juzgado de conocimiento ordenara oficiar a la agencia judicial referida por el memorialista, donde reposan los dineros que pretende sean embargados y de hacerse varias precisiones respecto a los títulos judiciales sobre los que recaé la medida, procedió la juez de la causa, mediante providencia del 1º de septiembre del año que corre, a determinar:

"... atendiendo a que el Juzgado Doce (12) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín dio respuesta al requerimiento realizado por el Despacho, informando que en la cuenta Judicial Nro. 050012048001 del Centro de Servicios SAP Medellín Portal Banco Agrario, se encuentran los títulos N°413230003128941 por valor de \$315.549.886, N°413230003128942 por valor de \$10.000.000, N°413230003128943 por valor de \$5.000.000, N°413230003128944 por valor de \$10.000.000, N°413230003128945 por valor de \$77.000.000 N°413230003128946 por valor de N°50.000.000, con ocasión del proceso bajo el radicado 05 001 60 00 206 2013 41056, en virtud de un embargo decretado por el Juzgado Cuarenta y Uno (41) Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín en audiencia del 22 de agosto de 2017, los cuales reposaban en el Juzgado Noveno (9) Civil del Circuito de oralidad de Medellín y a la fecha se encuentra en trámite en ese juzgado el Incidente de reparación integral de perjuicios interpuesto por las víctimas (pdf16MemorialRespuestaOficio) y en virtud de la aclaración de solicitud de medida que hace el abogado Moreno Suarez se tiene:

... solicita el ejecutante se decrete el embargo y secuestro de los depósitos judiciales en los términos del artículo 465 de CGP, estos es, bajo la figura procesal de CONCURRENCIA DE EMBARGO, que se encuentran en la cuenta judicial Nro. 050012048001 del Centro de Servicios SAP Medellín, portal del Banco Agrario, números N°413230003128941 por valor de \$315.549.886, N°413230003128942 por valor de \$10.000.000, N°413230003128943 por valor de \$5.000.000, N°413230003128944 por valor de \$10.000.000, N°413230003128945 por valor de \$77.000.000, N°413230003128946 por valor de N°50.000.000, y que se le limite el

embargo al monto que el despacho considere, títulos que indica fueron generados por la FUNDACIÓN FUNDABBA como devolución del dinero dado por la fundación como parte del precio de lote de terreno, cuyo contrato de promesa de compraventa fue declarada resuelta judicialmente por mutuo disenso, depósitos que en la actualidad están a órdenes del Juzgado Doce (12) Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín dentro del proceso con radicado 05001600020620134105600 como ya se indicó.

Ahora, considera el despacho viable el decreto del embargo solicitado, pero no bajo la figura contemplada en el artículo 465 del CGP (Concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades), como se solicita, sino, bajo los parámetros del artículo 466 del CGP, esto es, embargo de remanentes, por lo siguiente:

Los artículos 2494 y 2495 del Código Civil disponen en forma literal, lo siguiente:

"ARTICULO 2494. CRÉDITOS PRIVILEGIADOS. Gozan de privilegio los créditos de la primera, segunda y cuarta clase.

ARTICULO 2495. CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE La primera clase de crédito comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran:

...

4. Los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo.

... "

A su vez el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 345, modificado por el 36 de la Ley 50 de 1990, señala en forma literal respecto a la prelación de crédito, lo siguiente:

"PRELACIÓN DE CRÉDITOS POR SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, la cesantía y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás.

...

*En este caso, tenemos que el crédito NO cumple con las premisas legales para ser considerado de primera clase, pues de acuerdo a la sentencia de primera instancia emitida por esta dependencia judicial dentro del proceso ordinario con el radicado: 05001 31 05 **013 2019 00742** 00; la condena fue por el pago de honorarios profesionales, no de derechos laborales como indica la norma, no siendo posible aplicar la figura de la concurrencia de embargo, ni mucho menos catalogar el crédito vigente en el presente proceso como de primera clase.*

Se debe tener en cuenta también, que los títulos judiciales que se relacionan, reposaban a órdenes del Juzgado Doce (12) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, con ocasión al trámite que se surte en ese juzgado de Incidente de reparación integral de perjuicios dentro del proceso con radicado 050016000206201341056, títulos que se generaron en virtud de un embargo decretado por el Juzgado 41º Penal Municipal con Función de Garantías de Medellín y que reposaban inicialmente en el Juzgado 9º Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

En consecuencia, se decretará el embargo de los títulos judiciales que se encuentran en la cuenta Nro. 050012048001 del Centro de Servicios SAP Medellín

Portal Banco Agrario, N°413230003128941 por valor de \$315.549.886, N°413230003128942 por valor de \$10.000.000, N°413230003128943 por valor de \$5.000.000, N° 413230003128944 por valor de \$10.000.000, N°413230003128945 por valor de \$ 77.000.000 N°413230003128946 por valor de N°50.000.000 que por cualquier causa de ordenen desembargar y el de los remanentes del producto de los embargos que se encuentren a disposición del Juzgado Doce (12) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín dentro del proceso que allí se tramita con radicado 050016000206201341056, embargo que se limita a la suma de \$78.238.915.

Todo lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 466 del CGP:

...

Inconforme con lo anterior, el apoderado del ejecutante interpuso los recursos de reposición y apelación, reiterando su solicitud de decreto de la medida en los términos del artículo 465 del CGP, indicando:

"

- La FUNDACION FUNDABBA – que es una entidad sin animo de lucro - fue la que llegó a recibir aportes económicos de las ahora llamadas victimas en el incidente de reparación integral, que cursa ante el Juzgado Doce (12) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín.
- Como ha de esperarse, todas esas personas aportantes al proyecto constructivo de un edificio de apartamentos recibirán la devolución del dinero aportado por cada una de ellas, para tal proyecto, recibido primero por la FUNDACION FUNDABBA y por ésta, pagado a los promitentes vendedores del lote que habría de ser construido y, ante el incumplimiento de ambas partes, que declaró la promesa de contrato de compraventa resuelta por mutuo disenso, logré con el ejecutivo a continuación del ordinario, que los obligados en la sentencia emitida por el JUZGADO 9º CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, o sea, los promitentes vendedores, devolviesen los dineros indexados y se consignaran a órdenes del JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, para el proceso ejecutivo a continuación del ordinario , con radicado No. 05001310300920160076800,
- Luego, el Juzgado Cuarenta y Uno (41) Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín ordenó el embargo de tales títulos y ahora el Juzgado Doce (12) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, de conocimiento, los tiene a su disposición para el pago de la reparación integral a favor de los aportantes (o sea, los que le llegaron a entregar dinero a la FUNDACION FUNDABBA como

pago del precio, para el desarrollo del proyecto constructivo) ahora llamados "víctimas".

- Me pregunto, qué futuro le espera al proceso ejecutivo laboral del suscrito, si el dinero contenido de los depósitos judiciales, se destinarán por concepto de devolución del dinero, o sea, de los aportes al pago del precio del lote que iba a ser construido con el edificio AIRES DE ORIENTE, con dirección en Medellín, carrera 32 No. 49-61 y con matrícula inmobiliaria No. 001-167966 de la Oficina de Registro de II. PP. de Medellín, Zona Sur.
- El resultado de este proceso ejecutivo sería ilusorio, nunca habrá remanentes para este proceso, pues todo el dinero devuelto por los promitentes vendedores del lote y consignados al JUZGADO 9º CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, será entregado a los aportantes del proyecto.
- Cómo ver como justo y legal que primero se pague a los aportantes del proyecto constructivo, lo entregado por ellos a la FUNDACION FUNDABBA y no se pague primero al abogado que logró recuperar los dineros dados por ellos, para el proyecto, constructivo; esa decisión conlleva un enriquecimiento injusto a favor de los que han de recibir el dinero dado en sus aportes al fracasado proyecto constructivo, en otras palabras los que recibirán la devolución del dinero dado como precio del lote.
- Es que de no haber sido exitosa mi intervención judicial en favor de la FUNDACION FUNDABBA, no se habría recuperado el monto que ha de ser repartido entre ellos.
- En el incidente de reparación integral que se tramita ante el Juzgado Doce (12) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, no se procura por las víctimas que un "deudor" les pague, sino la devolución de

un dinero dado a la FUNDACION FUNDABBA que, como entidad sin ánimo de lucro (como puede verse en el certificado de existencia y representación legal de la misma, que obra en el expediente), intervino en un negocio de compraventa de un lote, para ser construido por los mismos aportantes al proyecto.

- Luego, ante los problemas económicos y jurídicos que se presentaron en dicha negociación, ante un proceso judicial el suscrito abogado intervino a favor de esa entidad sin ánimo de lucro que les representaba y se logró la recuperación de lo entregado por el precio.
- Este es el motivo de inconformidad del suscrito abogado.
- Los aportantes al proyecto constructivo deben pagar o reconocer los honorarios profesionales del suscrito abogado en forma directa y por ello, puede y debe su Despacho embargar los títulos judiciales en el monto que considere sea procedente.
- Para el suscrito abogado la FUNDACION FUNDABBA, al ser una entidad sin ánimo de lucro, obró como mandataria en la promesa de contrato de compraventa del lote donde habría de construirse el edificio AIRES DE ORIENTE; esa entidad obró como "puente", entre los que prometían vender el lote y los aportantes del dinero para su compra, pues no tenía ni podía tener dineros propios por su condición de entidad sin ánimo de lucro.
- Existe una obligación económica a favor del suscrito abogado y en definitiva el que debe de pagarla son los beneficiarios del dinero recuperado judicialmente y ante la concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades, debe de aplicarse el artículo 465 del CGP y de no ser éste, algún otro que consulte la equidad y la justicia, pero nunca el aplicado 466 ib, pues se torna injusto y conlleva un enriquecimiento iniusto o sin causa en favor de los incidentistas en el

”

En providencia del 15 de septiembre del año que corre, la juez de la causa mantuvo su decisión, insistiendo que el crédito reclamado no cumple con las premisas legales para ser considerado de primera clase, pues de acuerdo a la sentencia de primera instancia, la condena fue por el pago de

honorarios profesionales, no de derechos laborales como indica la norma, no siendo posible aplicar la figura solicitada, ni mucho menos catalogar como privilegiado el crédito vigente en el presente proceso. No obstante, al encontrarlo debidamente interpuesto y sustentado, concedió la alzada ante esta Corporación.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Teniendo en cuenta la providencia atacada y la inconformidad de la parte recurrente, habrá de establecerse si en el presente evento procede o no decretar la medida cautelar pretendida en los términos del artículo 465 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y de la S.S.

En el ordenamiento jurídico se conciben las medidas cautelares como una figura a la cual puede acudir el demandante de manera preventiva para garantizar el cumplimiento de la decisión adoptada, en caso que le sea favorable. En ese orden de ideas el apoderado de la parte activa petitionó, bajo el amparo del artículo 465 del CGP, el embargo de varios títulos judiciales, que ya se encuentran sometidos a tal medida dentro del proceso radicado bajo el número 05 001 60 00 206 2013 41056, en virtud de un embargo decretado por el Juzgado Cuarenta y Uno (41) Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín, en audiencia del 22 de agosto de 2017, los cuales reposan en el Juzgado Noveno (9) Civil del Circuito de oralidad de Medellín, encontrándose a la fecha, a ordenes del Juzgado Doce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, donde se tramita el incidente de reparación de integral de perjuicios interpuesto por las víctimas de estafa agravada y otros delitos contra el patrimonio económico, en proceso penal en el cual fueron condenados Andrés Felipe Villada Penagos y otros (archivo 20 pdf).

La norma que se pretende sea aplicada, en su tenor literal dispone:

“Artículo 465. Concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades:

Quando en un proceso ejecutivo laboral, de jurisdicción coactiva o de alimentos se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicará inmediatamente al juez civil, sin necesidad de auto que lo ordene, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate. El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitará al juez laboral, de familia o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. Dicho auto se comunicará por oficio al juez del proceso laboral, de familia o al funcionario que adelante el de jurisdicción coactiva. Tanto este como los acreedores de origen laboral, fiscal y de familia podrán interponer reposición dentro de los diez (10) días siguientes al del recibo del oficio. Los gastos hechos para el embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes en el proceso civil, se cancelarán con el producto del remate y con preferencia al pago de los créditos laborales, fiscales y de alimentos. (...)”

Con el propósito facilitar la comprensión de esta esta cautela (art. 465 CGP), de entrada conviene señalar, que como fue indicado en la sentencia STC3555 de 2020, citando la providencia C-664 de 2006, el encabezado del artículo 465 del C.G.P. “*no es el más afortunado, pues realmente no prevé la coexistencia de manera simultánea de embargos decretados en distintos procesos, **sino que en estricto sentido establece una prelación de pagos que debe ser aplicada por el juez del proceso civil en el cual se decretó el embargo y se perfeccionó.***”

Se debe precisar que en dos eventos previstos en el Código General del Proceso en cuanto a medidas cautelares se refiere, la prelación de créditos adquiere relevancia cuando: i) La **prelación de embargos** contemplada en el numeral 6 del artículo 468 en virtud del cual el embargo decretado con base en el título hipotecario o prendario desplaza a aquel que se decretó sin dicha garantía, así se haya registrado o practicado con anterioridad. ii) La **concurrencia de embargos en procesos de diferentes jurisdicciones** establecida en el artículo 465, en virtud de la cual cuando en un proceso ejecutivo laboral o de la jurisdicción coactiva se decrete el

embargo de bienes embargados en uno civil, **la medida se comunicará inmediatamente al juez civil para que aquel, una vez se lleve a cabo el remate del bien y previa solicitud de la liquidación del crédito al juez laboral o Fiscal, distribuya el producto del remate entre todos los acreedores de acuerdo a la prelación de créditos.**

En ese orden de ideas y a efectos de resolver el problema jurídico planteado, cuando el ejecutante solicita la medida cautelar contemplada en el artículo 465 ibídem, no está requiriendo en estricto sentido una prelación de créditos ante el juez laboral, sino que está persiguiendo un bien que ya está embargado en otro proceso civil, **correspondiéndole al juez civil aplicar la figura de prelación de créditos y no al juez laboral**, como ocurrió en este caso, en el que la juez de la causa de tajo manifestó que no se cumplían los requisitos de la disposición pluricitada, indicando que *"la condena fue por el pago de honorarios profesionales, no de derechos laborales como indica la norma, no siendo posible aplicar la figura de la concurrencia de embargo, ni mucho menos catalogar el crédito vigente en el presente proceso como de primera clase"*.

Y es que la norma es clara al advertir que es el juez del proceso civil quien determinará la prelación de los créditos, pues nótese como prevé: *El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitará al juez laboral, de familia o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial.*

Así fue explicado por la jurisprudencia civil en los siguientes términos:

"... Nótese, ante el concurso de embargos en coercitivos de diferente jurisdicción:

"(...) a pesar de que, conforme la prelación de créditos, los de orden fiscal y los créditos laboral [y las deudas alimentarias] tienen prelación para el pago (...) se dispuso que el embargo practicado primeramente por el juez civil quedaba en firme, pero el embargo decretado en el proceso ejecutivo [por alimentos] se acumularía al proceso ejecutivo civil [con garantía real], conforme a las siguientes

reglas: 1) el auto que decreta el embargo de los bienes dentro del proceso [alimentario] se comunicará por oficio notificadorio al juez que conoce del proceso civil [hipotecario] donde se encuentran embargados los bienes (...)¹. (subraya fuera de texto).

Cumplido lo anterior, **el juzgador civil**:

"(...) [A]delantará [el compulsivo] en todas sus partes hasta el remate; este se llevará a cabo y se harán las liquidaciones de los créditos y de las costas a que hubiere lugar dentro del proceso ejecutivo civil, a fin de que la tramitación del proceso civil quede lista para entregar el producto del remate a los ejecutantes, o para entregar a los acreedores los dineros embargados o que consignó el deudor para pagar los créditos que se persiguen ejecutivamente (...)"².

Agotadas tales fases, **emerge la importancia del segundo evento, la jerarquización de las acreencias**, porque en ese momento afloran los privilegios crediticios otorgados por el legislador, como lo acota Nelson R. Mora G.:

"(...) **Luego que el juez civil reciba la liquidación** definitiva y en firme del crédito y las costas proferidas contra el ejecutado dentro del proceso ejecutivo [por alimentos] con base en esa liquidación y mediante auto que dictará el juez del proceso ejecutivo civil, **se procederá a hacer la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial** (...)"

"(...) Para efectos de la prelación de créditos, el juez aplicará las reglas consignadas en los arts. 2488 a 2511 del C.C. (...)"³.

Conclúyase de lo anterior, la autonomía de las dos situaciones jurídicas, prevalencia de embargos y de créditos, porque mientras aquella, la de cautelas, dado su carácter netamente procesal, determina cuál debe registrarse en el folio de matrícula inmobiliaria para la preservación del bien garantía de pago.

La segunda, esto es, la prelación de créditos es de raigambre sustancial, pauta la preferencia en el orden de los créditos concurrentes al momento de distribuir los recursos obtenidos **por el funcionario ejecutor por razón de su importancia constitucional, sustancial y vital; institución ligada propiamente con los derechos fundamentales de la persona humana, con la naturaleza, clase e importancia de los créditos, el carácter vital o existencial, público o privado**, etc, cual acontece con los alimentos.

(...)

A tal conclusión arribó la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del numeral 1º del artículo 558 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 306 del Decreto 2282 de 1989:

"(...) El encabezado de este artículo [542 del Código de Procedimiento Civil reproducido por el art. 465 del C.G.P.] no es el más afortunado, pues realmente no prevé la coexistencia de manera simultánea de embargos decretados en distintos procesos, sino que en estricto sentido establece una prelación de pagos que debe ser aplicada **por el juez del proceso civil** en el cual se decretó el embargo y se

¹ MORA, Nelson G. *Procesos de Ejecución*. Tomo II. Bogotá: Temis, 1973, Pág. 227.

² *idem*

³ *ibidem*

perfeccionó. Empero, a pesar de su denominación equívoca esta es la disposición mediante la cual se asegura el cumplimiento de los órdenes establecidos Código Civil para la satisfacción de los créditos, pues determina a cuál acreedor debe pagársele en primer término del producto del remate de los bienes embargados, aun cuando subsista la medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo con garantía real que se adelanta ante la jurisdicción civil (...).⁴

Tampoco puede afirmarse como lo señaló la primera instancia que el asunto no cumple con las premisas de la disposición referida, porque se busca “*es el pago honorarios profesionales, no de derechos laborales*”, pues dicho artículo se refiere al proceso ejecutivo laboral, no se está haciendo alusión exclusivamente a obligaciones surgidas de una relación laboral, **sino al proceso ejecutivo laboral en general**, con lo cual se reitera que a quien le corresponde calificar el crédito cuyo pago se esté solicitando en el proceso ejecutivo, es al juez civil y no al laboral, luego es evidente que la autoridad judicial de primera instancia se apresuró al calificar el crédito del ejecutante y de contera negar la medida cautelar por dicha razón, pues para que sea procedente lo necesario es que previamente: (a) exista una medida de embargo perfeccionada sobre unos bienes por cuenta de un proceso civil; y (b) que en el proceso laboral se decrete el embargo de al menos uno de esos bienes embargados en el trámite civil.

En este asunto, lo que ocurre es que, como se vio en los antecedentes, si bien existen unas medidas de embargo ya perfeccionadas sobre unos bienes, **estas fueron decretadas con ocasión de una causa penal atendiendo al incidente de reparación integral para garantizar el pago de perjuicios que se hubiesen ocasionado**, frente a lo cual no sería posible el decreto de embargo en los términos del artículo 465 del CGP, hoy pretendido, y es que en este caso, el juez penal que tramita el incidente de reparación no tiene la competencia para llevar acabo el procedimiento allí dispuesto, así lo ha explicado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, frente al alcance de las medidas cautelares decretadas en los procesos penales, en los siguientes términos:

⁴ Providencia STC159-2021

"Sabido es que ejecutoriada la sentencia condenatoria la fiscalía, la víctima o el delegado del Ministerio Público pueden solicitar la apertura del incidente de reparación integral regulado en el canon 102 del C.P.P., modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010, cuya finalidad toral consiste en establecer la cuantía de los perjuicios irrogados al sujeto pasivo de la conducta punible, «mediante sentencia» (art. 105).

De ese modo, en firme la providencia que determina el monto de la «indemnización», le incumbe al sancionado pagarla oportunamente. En caso contrario, al acreedor le queda la vía ejecutiva ante el juez civil para hacer efectiva aquella «condena» pecuniaria con fundamento en el artículo 422 del Código General del Proceso, en cuanto dispone que «pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles» que «emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción».

En tal contexto, las medidas cautelares decretadas y practicadas en la actuación penal en aras de «asegurar la indemnización de la víctima» deberán ser puestas a disposición del coercitivo civil, para efectivizar aquel propósito, ya que el inciso final del artículo 96 del C.P.P. reza que se «levantará el embargo penal», entre otras circunstancias, «vencidos los treinta días previstos en el artículo 106 sin que se hubiere promovido el incidente de reparación integral o transcurridos 60 días contados a partir de la ejecutoria de la providencia del artículo 105 condenatoria en perjuicios sin que se presentare demanda ejecutiva ante el juez civil».

En definitiva, el juez penal carece de facultad para adelantar diligencias de remate, porque los bienes cautelados en asuntos de esa naturaleza deberán «ponerse a disposición del juez civil», siempre que sea necesario materializar las medidas a favor de la víctima – acreedora, en virtud de las competencias asignadas a esta especialidad.”⁵

En consecuencia, se confirmará el auto apelado pero por las razones expuestas.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado. #8 artículo 365 CGP.

En mérito de lo expuesto, **la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín,**

Resuelve:

⁵ Sentencia STC3810-2020

Confirmar el auto del 1 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito dentro del proceso ejecutivo promovido por **Gonzalo Nicolas Moreno Suarez** en contra de la **Fundación Fundabba en Liquidación**, por las razones expuestas en este proveído.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado. #8 artículo 365 CGP.

Ejecutoriada esta decisión, por secretaria devuélvase la actuación digitalizada al juzgado de origen para que continúe con el trámite pertinente.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, en virtud de lo dispuesto en artículo 295 C.G. del P, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

Los magistrados, (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados No. 194 del 27 de octubre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>